



# Coqueteando con el fascismo

## Elecciones en Brasil y despegue de Bolsonaro

DOLORES ROCCA RIVAROLA (UBA/CONICET)  
18 DE SEPTIEMBRE DE 2018

---

Es un domingo cualquiera en abril de 2016, en casa. Sólo que no lo es. La Cámara de Diputados de Brasil está votando la apertura del proceso de impeachment a Dilma Rousseff. Miro la sesión en vivo a través de *youtube* y cada tanto le comento a mi pareja, que vivió una década en Brasil, lo que escucho, anonadada. Los discursos, si es que puede llamársele así a las alocuciones de quienes están a favor de enjuiciar a Rousseff, son una combinación de lo insólito, lo ridículo y lo patético. No usan su tiempo para justificar el voto y argumentar por qué consideran que debe ser juzgada, o en qué sentido se trata de un “crimen de responsabilidad”, como categorizaron a las pedaleadas fiscales, que

otros gobiernos habían usado antes a nivel nacional y contemporáneamente a Dilma, a nivel estadual. El micrófono es usado, en cambio, para formular dedicatorias de su voto pro-impeachment. A Dios, a sus familias, a la población de su Estado de proveniencia, al pueblo evangélico, a determinados valores. Y si tienen que razonar, dicen “porque perdió la mayoría”, o “porque el pueblo lo pide”, sin hacer referencias a los fundamentos formales de la acusación que viene motorizando el proceso. Arengan al resto. Gritan “chau querida”. Se envuelven en banderas de sus Estados. Festejan cada voto. Después de todo, y lo explicitan, están echando a la *petralhada*<sup>1</sup> del gobierno y se sienten cruzados de la anticorrupción. El mecanismo legal es lo de menos. De hecho, varios tienen, ellos mismos, y ellas, causas abiertas por corrupción. Quien preside la sesión, Eduardo Cunha, uno de los impulsores del proceso de impeachment, es el caso más paradigmático, y en septiembre será expulsado de la Cámara por ello. Pero ese día domina los tiempos, otorga la palabra y disfruta cada momento de su chantaje y venganza personal.

Un diputado de San Pablo insta al recinto a cantar algo que entonaban los manifestantes en las calles días antes. Se arman tumultos. Algunos de quienes votan contra la apertura del impeachment gritan “no va a haber golpe” y logran subir una bandera a la mesa del presidente de la cámara que reza “Fuera Cunha”. Luego, Cunha anuncia que va a hablar el diputado Jair Bolsonaro, del PSC.<sup>2</sup> A los gritos, felicita a Cunha por la forma en que condujo el proceso. Y dice “perdieron en el ’64, perdieron ahora [...] por la familia y por la inocencia de los niños en las aulas”. Mira un pequeño papel y sigue: “contra el comunismo, por nuestra libertad, contra el foro de San Pablo”.<sup>3</sup> Y remata con una dedicatoria definitiva: “por la memoria del coronel Carlos Alberto Brillante Ustra, el pavor de Dilma Rousseff”. Luego menciona a las Fuerzas Armadas y a Dios. Pero lo que acaba de decir

1 El neologismo *petralha* fue acuñado por Reinaldo Azevedo, bloguero conservador que escribió el libro *El país de los petralhas*. Se trata de un juego de palabras que combina los términos *petista* (miembro del Partido de los Trabajadores) y *metralha*, en referencia a los “hermanos *Metralha*”, nombre que se le dio en Brasil a los personajes criminales de Walt Disney, *The Beagle Boys*. Esta definición de la palabra puede consultarse en Couto, C. G. (2015). Cambios y continuidades en la política brasileña reciente. En S. Tagle (ed.), *Alternativas para la democracia en América Latina* (pp. 291-335). México: Colegio de México/Instituto Nacional Electoral.

2 El Partido Social Cristiano tiene poco menos de 30 años de existencia. En 1989 participó de la coalición “Brasil novo” que llevó a Fernando Collor de Melo al gobierno. Una paradoja, teniendo en cuenta la gravitación que tiene la indignación anti-corrupción en la retórica de Bolsonaro. En 2018, migra de partido al Partido Social Liberal (PSL).

3 Evento anual que congrega a líderes y partidos autodefinidos como de izquierda y progresistas.

aturde cualquier palabra posterior. Ustra, que murió el año anterior al impeachment, había comandado el llamado DOI-CODI [*Departamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna*], organismo del ejército que concentró una parte significativa de las torturas y asesinatos de presos políticos durante la dictadura militar brasileña.

El modo en que los gobiernos brasileiros lidiaron, desde la recuperación democrática, con los crímenes de la dictadura militar (1964-1985) fue, por lo menos, polémico. Luego de décadas de un paradigma de pasividad del Estado brasileiro en torno a la producción de la verdad sobre esas muertes y torturas, en 2011, el gobierno de Dilma Rousseff dispuso la creación de las denominadas “Comisiones de la verdad”, en las que, por primera vez, según Cristina Buarque de Hollanda,<sup>4</sup> el Estado brasileiro asumía la responsabilidad por investigar las circunstancias de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial. Pero las mismas, bajo una noción de verdad como pedagogía democrática, no implicaban ninguna instancia de justicia (prohibida, por otro lado, por la Ley de Amnistía de 1979), sino tan sólo sesiones en las que testigos y víctimas se cruzaban con torturadores que debían comparecer pero podían negarse a declarar o aportar dato alguno. En agosto de 2013, pude asistir a observar una de ellas, acompañando a la autora, en el recinto de la Asamblea Legislativa del Estado de Rio de Janeiro, y centrada en el caso del periodista Mario Alves. Con la presencia de familiares y organizaciones de la sociedad civil, sólo uno de los cuatro militares citados, Valter da Costa Jacaranda, asistió. Respondió preguntas del presidente de la comisión durante más de 45 minutos, pero negó cualquier conocimiento del caso en cuestión. La jornada implicó, entonces, catarsis, interpelación al victimario, insistencia y, finalmente, frustración por no poder conseguir más datos.

Ustra, reivindicado por Bolsonaro, también había comparecido en 2013 a una comisión de verdad, pero negando cualquier tipo de participación en crímenes y resaltando que él había “combatido al terrorismo” y eligiendo el silencio ante la pregunta sobre métodos específicos de tortura. Bolsonaro, así como su hijo Eduardo, también diputado, que dedicó su propio voto a “los militares del ‘64”, son inteligibles en ese contexto, en el que la justicia no ha sido aún posible y el reivindicar el golpe militar y la tortura no tienen un costo político significativo.

4 Buarque de Hollanda, C. (2015). Verdade e Política: Notas sobre um Paradigma de Democracia Contemporânea. *Revista da EMERJ*, 18(67), (pp. 507-515).

En la encuesta del Instituto Datafolha del 10 de septiembre de 2018, luego del ataque con cuchillo sufrido por Bolsonaro y con posterioridad también a la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) que confirmaba que Lula, preso desde abril, no podría ser candidato a la presidencia, Bolsonaro está primero en intención de voto. Los/as siguientes cuatro aparecen más de diez puntos más abajo, en una suerte de empate técnico. De ellos/as, el más débil a nivel nacional sigue siendo Haddad, escogido por el PT como sustituto de Lula, en una fórmula compartida con Manuela D'Ávila, del Partido Comunista do Brasil. No obstante, Haddad exhibe una tendencia de crecimiento desde agosto, cuando se anunció su candidatura como “plan B”,<sup>5</sup> y con más fuerza en el nordeste, región en la que Lula y Dilma se fortalecieron especialmente en sus respectivas elecciones desde 2006. Aunque aún muchos/as desconocen que Haddad es el candidato que Lula apoya (51%), un porcentaje muy significativo (33%) afirma que votaría a quien Lula indicara. Finalmente, los votos blancos y nulos se perfilan con un 15% y un 7% sigue sin decidirse. Hay que decirlo, Bolsonaro también es —una vez eliminado Lula de la carrera— el candidato con mayor nivel de rechazo, con un 43%.

¿Cómo se compone el electorado potencial de Bolsonaro? Según esa misma encuesta, el candidato es más fuerte entre el electorado masculino (32%) que en el femenino (17%). Se mantiene en niveles similares entre los distintos grupos de edad (entre 23 y 27%), salvo entre mayores de 60 años, donde cae a 18%. Tiene un apoyo destacado, de 38%, en quienes tienen un ingreso entre cinco y diez salarios mínimos, que cae a 17% entre quienes ganan el equivalente a menos de dos. Y su intención de voto es el doble entre los sectores más escolarizados (30%) en comparación con quienes sólo alcanzaron educación primaria (15%). Estos números obligan a matizar aquellas lecturas que hoy se apresuran a atribuir especialmente al electorado pobre y poco educado el apoyo a un candidato que ha sido tildado de homofóbico, racista, misógino y defensor de la tortura y la dictadura militar. De todos modos, un rápido seguimiento (o *stalkeada*, hablando mal y pronto) a algunos/as de sus seguidores/as en Facebook, muestra que los y las mismas descreen de esas acusaciones (como un seguidor negro que comparte en la red la noticia de la decisión del Supremo Tribunal Federal de rechazar la denuncia contra

5 En agosto, dos semanas después de lanzarse la fórmula Lula-Haddad-D'Ávila como trío, el nivel de desconocimiento de Haddad era del 41% (*Datafolha*, encuestas del 20 y 21/8).

Bolsonaro por racismo) y que destacan, en cambio, su religiosidad, su “patriotismo”, su posición “a favor de la familia”, contra el aborto, la corrupción y “el comunismo”.

En sus modos de autopresentarse, Bolsonaro se muestra crítico del referéndum de 2005 de “desarmamento”, la corrupción, la burocracia del estado, y de varias políticas sociales de los gobiernos petistas. También ha formulado declaraciones estigmatizantes de la población negra, LGBT+, india y de las mujeres. Pero, en el marco de una recesión ya pronunciada, también se refiere al desempleo, como lo hacía el nazismo en plena crisis de la República de Weimar por la depresión iniciada en la caída de Wall Street en 1929 y la hiperinflación posterior (con seis millones de parados en 1932). Aborda así la cuestión de un desempleo acuciante, que entre 2014 y 2016 casi se duplicó, y en abril de 2018 ya alcanzaba un 13,1%, según el Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística. También, nada nuevo en los últimos años en América Latina, reprende al periodismo, tildándolo de mentiroso o de querer perjudicarlo. Y critica a los *marketeiros* de las campañas electorales. Con ello, apunta a definirse como un candidato de la gente, desde abajo, desde la horizontalidad de las redes sociales (como en un video posteo en su perfil, en el que pide donaciones a sus votantes) y auténtico —lo cual no significa que en la práctica, su propia campaña carezca de profesionales publicitarios.

Pero, aunque es conocido por su origen como militar, Jair Messias Bolsonaro no es un *outsider* de la política. No es un *uomo qualunque*<sup>6</sup> con tics fascistas. Ni siquiera es un empresario a lo Trump, que se presentaba como la antítesis y superación de una clase política atrofiada. Bolsonaro es diputado desde 1991, con lo cual debe conocer bien las dinámicas, prácticas espurias, intercambios o *barganhas* que caracterizaron a la Cámara estos 27 años. Su propia familia está también inserta en la política institucional. Y él ha cambiado de partido en varias ocasiones, engrosando el fenómeno hartamente frecuente en Brasil de migraciones partidarias dentro del parlamento, con la desafiliación y afiliación a nuevos partidos por parte de la dirigencia política, así como cambios radicales y repentinos en las posiciones orgánicas de los partidos.

6 El *Fronte dell' Uomo Qualunque* o “Frente del hombre común”, que dio lugar al llamado *qualunquismo*, fue un breve partido político en la Italia posfascista de ideología monárquica y anticomunista, y que defenestraba a los partidos que en la época se coaligaron para llevar adelante la transición republicana.

El ataque sufrido hace unos días en una caravana electoral en Juiz de Fora, Minas Gerais, no sólo colocó a Bolsonaro en el centro de la atención nacional e internacional, sino que le permitió eludir el problema inicial de no contar formalmente con muchos minutos en el denominado *Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral* (HGPE).<sup>7</sup> Desde el episodio, el candidato y su familia contaron con un acceso renovado a la televisión de aire y la prensa gráfica. Y esta vez, no a partir de sus dichos revulsivos, sino como víctima de un contexto de violencia, como si su propia retórica, que días antes, en un acto en Rio Branco, Acre, llamaba a “fusilar” a los petistas, no lo hubiera alimentado.

Mientras tanto, la conducción del PT sigue repitiendo su táctica de alianzas amplísimas, como si el escenario político fuera, después del golpe contra Dilma, parecido al de elecciones como la de 2002 o 2006. Al igual que en los comicios municipales de 2016, cuando sólo meses después de la destitución de Rousseff, el partido negoció alianzas con el PMDB, partido de Temer, en por lo menos 200 ciudades, ahora en 2018, en 15 Estados se alió con partidos que apoyaron el impeachment. En seis de ellos, encabezando fórmula, con un candidato propio a la gobernación. En los otros nueve, directamente apoyando a candidatos de partidos que, durante el impeachment, había llamado de “golpistas” (MDB, PSD, PTB, etc.).<sup>8</sup> En relación con ello, Gleisi Hoffmann, presidenta del PT, decía en los medios “No hay contradicción porque estamos dejando claro que tienen que apoyar a Lula”, como si lo segundo implicara que el golpista deja de serlo, como si ese carácter quedara anulado al sellarse un acuerdo electoral. Esto implica un problema político. O bien estamos ante una coyuntura de gravedad, y de necesaria movilización de resistencia a un golpe institucional, y a un gobierno sin legitimidad y con una agenda de destrucción de derechos sociales y laborales, con episodios de violencia fascista como el asesinato de Marielle Franco, o bien se trata de un escenario en el que hay margen todavía para negociaciones, acuerdos e intercambios con quienes antes fueron llamados “golpistas” e incluso, en algunos casos, actualmente llevan adelante y sostienen ese gobierno.

7 El HGPE tiene dos elementos: la propaganda electoral transmitida en bloques (“programa electoral”) y las “inserciones” comerciales o spots. En ambos casos, el tiempo se distribuye entre los partidos o coaliciones: 1/3 es dividido en partes iguales entre todos y los 2/3 restantes, de acuerdo al tamaño de las bancadas parlamentarias.

8 En Acre, Bahía, Ceará, Piauí, Minas Gerais y Rio Grande do Norte, el PT negoció el apoyo a una candidatura propia. En Amapá, Alagoas, Mato Grosso, Sergipe, Amazonas, Rondonia, Tocantins, Paraíba y Pernambuco, apoyó candidaturas de otros partidos.

El ascenso de Bolsonaro abre preguntas que no tendrán respuesta hasta el 7 de octubre, cuando tengan lugar los comicios, o tal vez, incluso, hasta el 28, fecha establecida para una eventual segunda vuelta electoral: ¿Cuánto puede seguir cayendo o, a la inversa, recuperarse, el caudal electoral del PT, que en 2016 logró elegir a sólo un cuarto de sus candidatos a intendente? ¿Qué posibilidades tiene de crecer, a través de la polarización, una fórmula que carezca de la presencia de Lula en el territorio y en los medios para acompañar a Haddad y D'Ávila? Y, si Bolsonaro llegara a entrar a una segunda vuelta electoral, que difícilmente gane (pero, convengamos, nada puede descartarse después del triunfo de Trump) ¿en qué medida puede darse un fenómeno de fuerza centrípeta hacia el o la candidata que lo enfrente en esa instancia, tratándose de figuras tan disímiles en términos identitarios y hasta ideológicos como Marina Silva, Ciro Gomes, Fernando Haddad y Geraldo Alckmin? En cualquier caso, el escenario brasileiro vuelve a disparar las alarmas.

De este modo este decreto junto a aquel que aprueba la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional (Decreto N° 703/18) y define el posicionamiento estratégico de la Argentina a nivel regional y global, establecen los nuevos parámetros del empleo del instrumento militar de la Defensa. Los decretos habilitan legalmente su intervención frente a “agresiones” como el narcotráfico, u otras formas del crimen organizado transnacional, y el terrorismo internacional. La primera forma de la “amenaza” deja de ser entendida legalmente como problema de “seguridad interior” para serlo como de seguridad nacional e internacional. Un principio aplicado por Colombia y también por México, derivado de sus respectivos alineamientos con Estados Unidos, con las consecuencias negativas para la ciudadanía y los militares que ya todos conocemos. La segunda es también resultado de la alianza con Estados Unidos, el compromiso con los problemas de seguridad de la OTAN y la evaporación, en la nueva directiva, del Consejo de Defensa Suramericano dependiente de la UNASUR que fuera creado en 2008. Recordemos que los ataques a la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) ocurrieron luego de la decisión del gobierno argentino de emplear a las Fuerzas Armadas en la Guerra del Golfo y antes del escenario dejado por el atentado a las Torres Gemelas (2001). Frente a este panorama, y a instancias de estos decretos, las Fuerzas Armadas verán reducida su estructura de ocupación territorial, se venderán inmuebles, se reducirá su personal permanente y se incorporará reserva (civiles contratados a tiempo parcial o con flexibilización laboral). El

menú neoliberal incluye un uso “eficiente” del instrumento militar de manera de complementar con “apoyo logístico” y comunicación, la acción de las Fuerzas de Seguridad en las fronteras y en la custodia de objetivos estratégicos.

### **Cuando la democratización ya no es el faro: militares víctimas del Estado**

Aunque el camino trazado por esta normativa ha generado disensos en el arco autodenominado “progresista”, también levantó y lo sigue haciendo innumerables críticas en el seno de las Fuerzas Armadas, y entre especialistas en la materia. Sin embargo, hay entre los primeros y los segundos, quienes coinciden en el diagnóstico: el Estado democrático no debería sostener Fuerzas Armadas con tan alto nivel de obsolescencia de equipamiento, una pirámide de personal invertida, totalmente envejecida, un éxodo espasmódico de personal joven (subalterno) capacitado y una pérdida del sentido de propósito. Los militares no han atentado con el orden constitucional en ninguna de las crisis político-económicas ocurridas en democracia (1989 y 2001). Han dejado de ser percibidos y auto percibidos como la “reserva moral” de la Patria y trazado vínculos de confianza con diversos sectores de la política nacional anti golpista.

La desaparición del ARA San Juan impulsó esos acuerdos básicos, pues mostró un límite: esa debilidad también se cobra vidas. La muerte de jóvenes militares, dadas las circunstancias en las que ocurrió, los –y la–, convirtió en víctimas. Víctimas del Estado, de su abandono deliberado, cuyos efectos acumulativos acabaron con el submarino. No fue el primer “accidente”. Hubo muchos en estos últimos 34 años en los que perdieron la vida o sufrieron graves lesiones, oficiales, suboficiales, aspirantes, soldados y cadetes, aunque fuera a cuenta gotas y sin tomar estado público, tapados por un espíritu de sacrificio militar que se fue volviendo contra ellos. Pocas posibilidades quedan de convertir estos daños irreversibles en un sacrificio por la Patria.

Reacciones del arco autodenominado progresista acordaron en esto. Así lo indican desde el acompañamiento de integrantes de Madres de Plaza de Mayo a los familiares de los tripu-

lantes desaparecidos, encadenados a las rejas que circundan la Pirámide de Mayo, a notas de periodistas del diario *Tiempo Argentino*<sup>9</sup> solidarizándose con las víctimas uniformadas.

No obstante, si bien tal debilitamiento de las Fuerzas Armadas contribuyó con la democratización al menos hasta promediar los gobiernos de los Kirchner, desde entonces algunas voces, tanto del anterior gobierno como del actual, comenzaron a mostrar que aquella política de Estado requería revisión. Más allá de mis ideas, se ve con claridad que de un tiempo a esta parte ese modo de confrontar a los militares para la democratización nacional, dejó de ser nuestro faro. Las Fuerzas Armadas perdieron incluso su importancia para la concreción de aquel proceso, no eran siquiera necesarias como el mal contra el cual erigir la democracia. Bueno, sí para algunos grupos que cargan con el dolor y la búsqueda de justicia por sus seres queridos. Pero los juicios por delitos de lesa humanidad aún continúan y siguen cayendo sobre ex integrantes de las Fuerzas Armadas.

La propia Cristina Fernández de Kirchner anunció que cierta manera maniquea de concebir a las Fuerzas Armadas del presente debía revisarse, cuando al conmemorar el 25 de mayo de 2013, semanas después de la inundación de la ciudad de La Plata luego de destacar la solidaridad de “miles de jóvenes de la política y las iglesias junto a los hombres de las Fuerzas Armadas” señaló: “Porque yo estoy segura que quienes pergeñaron ese golpe terrible del 24 de marzo de 1976 quisieron tener un río de sangre que separara al pueblo de las Fuerzas Armadas”. Seguidamente, cerró su discurso afirmando “tenemos que cerrar ese río con verdad, justicia, trabajo y la convicción de que tenemos que unirnos... la Patria es el otro, sea quien sea”. Sin embargo, subyacía una dualidad entre las misiones asignadas y las políticas de inversión en el sector.

### **Militarizar la seguridad o policializar a los militares**

A mediados de agosto de 2018 se desplegaron 500 efectivos del Ejército entre La Quiaca y Puerto Iguazú. El objetivo: “combatir el contrabando y el narcotráfico”. A fin de año, anunciaron algunos medios de comunicación, llegarán a 1.000, y posteriormente a un

9 Caballero, R. (25/11/2017) Macri, obligado a dar explicaciones. *Tiempo Argentino*. Recuperado de <https://www.tiempoar.com.ar/nota/macri-obligado-a-dar-explicaciones>

máximo de 10.000 soldados. El apoyo logístico y la interoperabilidad con las Fuerzas de Seguridad aprobadas en los decretos mencionados, serán el marco. El comando de la operación militar estará a cargo del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El operativo tanto como los decretos cerraron un largo proceso de negociación entre de un lado, jefatura de gabinete, las autoridades de los ministerios de Defensa, de Seguridad, la Gendarmería; y del otro, el Estado Mayor General de Ejército y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Las posiciones de los primeros y de los militares no fueron coincidentes, probablemente tampoco las de las diferentes carteras ministeriales. Se sabe que el Ejército consiguió sostener su posición y reducir el avance de las modificaciones que conducían a la pérdida de su personal, a la venta de inmuebles sin que su renta fuese transferida al presupuesto militar, y a ejecutar en los territorios fronterizos “tareas policiales” sin competencias legales. Luego de la amenaza de retiros masivos llegaron el aumento salarial a las Fuerzas Armadas y la aceptación del gobierno nacional, rechazada por el Ejército, de que cedieran 5.000 efectivos jóvenes a la Gendarmería. También el Ejército se negó a cumplir con el artículo 287 del Código de Procedimiento Penal mediante el cual el ministerio de seguridad sugería suplir la falta de poder de policía, obligando a los militares desplegados a actuar como cualquier otro particular en caso de flagrancia. Todo parece indicar que su despliegue se hizo en las condiciones sugeridas por altos mandos de Ejército, es decir: presencia en la zona a través de la realización de ejercicios de instrucción o maniobras, y no como observadores o en patrullas represivas. Así renunciaron también a los viáticos que sí percibieron en los operativos durante el gobierno anterior.

Ahora bien, ¿por qué emplear a militares en misiones policiales si la Argentina duplica el número de policías cada 100 mil habitantes recomendado por Naciones Unidas? ¿Por qué más Fuerza orientada a prevenir y reprimir el crimen si contamos con cerca de 500 cada 100 mil, el número más alto de América? ¿Por qué elegir la frontera norte y el despliegue terrestre si sabemos que pistas aéreas clandestinas en campos privados, el puerto de Rosario y de Zarate, son vías prominentes de entrada de drogas ilícitas? ¿Por qué intimidar a través de múltiples agencias del Estado (AFIP, Migraciones, Gendarmería y Aduana y ahora Ejército) el tráfico de subsistencia de personas ahogadas en décadas de desempleo en el mercado formal? ¿Por qué emplear militares si es más que sabido que sólo la inteligencia criminal y la investigación sobre lavado de dinero captura a los “peces gordos”?

Ahora bien, si la presencia del Ejército en la frontera será para realizar ejercicios de adiestramiento, ¿cuáles son los efectos? La puesta en escena ya cosecha sus costos. A horas del despliegue el presidente de Bolivia, expresó su repudio y acusó al gobierno argentino de “amedrentar” a su país. Si no fuera una simulación, entonces también habría que preguntarse cuál es el mensaje que se está enviando a los militares. Muchos jóvenes militares se están preguntando si acaso no terminarán convertidos en gendarmes. Una pregunta análoga a la que desde 2011 se hacen los gendarmes empleados en operativos urbanos fuera de la frontera como Cinturón Sur o Centinela. ¿Se puede seguir siendo gendarme “trabajando de policía”? Nuestras investigaciones etnográficas muestran que las ambigüedades introducidas en este proceso tienen altos costos personales e institucionales.

### **Soberanía nacional y regional frente al neoliberalismo periférico**

Abandonado el peligro de las Fuerzas Armadas como amenaza interna, su empleo como instrumento de la Defensa nacional opone ideológicamente, de un lado a quienes creen en la soberanía nacional y regional, en alianza con potencias que disputan la hegemonía estadounidense, y, por otro, quienes creen en una globalización hegemónica por el país del norte. Por supuesto que hay un abanico al interior de cada una de ellas sobre las que abundan colegas más especializados.

Por lo cual quisiera destacar, como cierre de esta reflexión, que para los primeros las Fuerzas Armadas son en tiempos de paz un instrumento disuasivo destinado a proteger nuestros recursos naturales requeridos en el mediano y largo plazo por procesos de desarrollo tecnológico y económico. Así, por ejemplo, el mar, los acuíferos, son de interés estratégico siempre que proyectemos su aprovechamiento, y no meramente como “reserva natural”. De manera que no hay sentido de propósito de las FFAA sin un proyecto de desarrollo doméstico a largo plazo, compartido internamente, y sin alianzas regionales. En el contexto internacional actual su protección requiere de mecanismos de integración político y militar, como ejemplo de lo cual es la OTAN. Porque a nadie se le ocurriría pensar en la capacidad defensiva de un país europeo, atendiendo solo a su dotación militar aislado de la OTAN, pues no hay duda que sería incapaz de disuadir el poder de fuego de amenaza alguna. Por este camino no hay Fuerzas Armadas argentinas viables si

no es en el contexto de la UNASUR/MERCOSUR/Consejo Suramericano de Defensa. Por estos días cada vez más bastardeado.

Pero como bien sabemos el neoliberalismo tiene otros objetivos y estas alianzas regionales son un obstáculo. Los militares, debilitados en su capacidad de confrontar con otros Estados nacionales, parecen ser un recurso para paliar el déficit en el sistema de protección social otrora ofrecido por el Estado de Bienestar, algunos de cuyos fragmentos aún muestran signos de vida. Así, todo parece indicar que el despliegue de policías, gendarmes y militares no es sino una forma de “dar seguridad” frente a esa desprotección estatal resultado de la larga agonía de la educación, la salud y la seguridad social pública en Argentina.